

La llamada Guerra del Gas es la muestra de cómo el Estado nacional reprimió toda oposición al proyecto Pacific LNG ocasionando la masacre de 63 personas y cientos de heridos, en defensa de los intereses de Repsol YPF y sus socias.

Proyecto Pacific LNG la explotación de un país

En el mes de junio del 2001, se conformó el consorcio PACIFIC LNG constituido por las transnacionales petroleras Repsol-YPF, British Gas (BG) y British Petroleum (BP), a partir de la firma de un convenio privado y confidencial realizado entre la empre-



Repsol YPF S.A. es una de las causante de la violación de los derechos humanos en Bolivia

sa Repsol YPF y Sempra Energy para la exportación de gas boliviano de los campos Margarita y San Alberto, adjudicados a las empresas del consorcio y a Petrobrás. El proyecto consistía en construir un gasoducto entre el campo Margarita y el Puerto Patillos en Chile, para ser transformado en una planta de licuefacción, posteriormente transportado en buques metaneros a las costas

de California y México y una vez allá reconvertido en gas natural, para ser distribuido en el mercado norteamericano por la empresa Sempra Energy en un estimado de 30 MMMC/día. Según los funcionarios del consorcio el proyecto tendría un costo de 5.000 a 7.000 millones de dólares.

La masiva exportación de gas en las condiciones en las que planteaba el

proyecto y las leyes vigentes en aquella época, significaban una mínima participación del Estado, que llegaría a cobrar solo el 18% de regalías, sobre un precio de exportación sumamente bajo –dólares 0,60 por millar de pies cúbicos- definido por el consorcio Pacific LNG, lo que le dejaría al país sólo \$us 0,10 centavos, lo que significaba la rápida extracción de las reservas gasíferas,

sin dejar beneficios para el país y lograr para las empresas Repsol YPF y British Gas unas ganancias extraordinarias. Según los cálculos el proyecto preveía ingresos para las empresas por 1.369.6 millones de dólares anuales, dejando para el país por pago de regalías entre 40 y 70 millones de dólares, por lo que se estima que en veinte años –duración del contrato- las transnacionales ganarían alrededor de 27 mil millones de dólares. Por otra parte luego de un sin fin de negociaciones finalmente el año 2003 las empresas petroleras definieron como puerto de exportación a Patillos en Chile.

Resistencia al saqueo

En este año, las organizaciones populares del país, declaran su oposición a exportar el gas por un puerto chileno, sin que se incluya en las negociaciones con el vecino país las demandas de reivindicación marítima boliviana y por otra parte se oponen a las condiciones totalmente desventajosas de venta de gas a las empresas petroleras, implementadas

El proyecto Pacífico LNG preveía ingresos para las empresas Repsol YPF y sus socias por 1.369.6 millones de dólares anuales (20 años), dejando para el país por pago de regalías solo entre 40 y 70 millones de dólares.

por la normativa del sector y el gobierno de Sanchez de Lozada. Por su parte el gobierno y las empresas petroleras inician una campaña masiva en un intento de convencer al pueblo boliviano de la necesidad de implementar el proyecto.

Frente a la oposición general que surge en el país, y avanzadas ya las licitaciones y negociaciones del consorcio, el gobierno nacional ratifica su total respaldo a la exportación en las condiciones mencionadas y continúa con la gestión del proyecto.

A finales de septiembre del año 2003, se inician grandes movilizaciones sociales para impedir la consolidación del proyecto Pacific LNG y la exportación del gas. En tanto las movilizaciones se

hacen más contundentes, el gobierno comienza a ejercer una represión mayor para garantizar la puesta en marcha del proyecto. Declaraciones del presidente Sanchez de Lozada y sus ministros, afirman en reiteradas oportunidades la viabilidad y seguridad de las inversiones y el proyecto de las empresas petroleras en el país, garantizando la exportación de gas por Chile, mediante los instrumentos de seguridad del Estado.

Masacre en Bolivia: el Estado defiende a la Repsol YPF y sus socias a toda costa

El 20 de septiembre de 2003, las movilizaciones campesinas del Altiplano paceño son reprimidas por el ejército con un saldo de 5 muertos y más de 20 heridos. Cuatro días después la Central Obrera Boliviana convoca a una huelga general indefinida, en contra de la exportación de gas y el proyecto Pacific LNG. Hasta finalizar la primera semana de octubre, las movilizaciones de campesinos, indígenas y trabajadores, se radicalizan y crecen, con el bloqueo



de caminos y el asedio permanente a la sede de gobierno. Se genera desabastecimiento en la ciudad de La Paz y el gobierno realiza una operación militar para abastecer de combustible la ciudad, provocando otros cinco muertos en la ciudad de El Alto el 11 de octubre y 26 muertos el 12 de octubre.

El 13 de octubre después de casi 50 personas muertas por la represión del ejército, el gobierno declara la suspensión temporal del proyecto de exportación de gas Pacific LNG y la realización de una consulta ciudadana para continuar con la gestión del proyecto. Hasta este momento a la demanda de no a la exportación de gas se junta el pedido de renuncia del presidente, por lo que continúan las movilizaciones, se radi-

calizan y se masifican en el resto del país y el ejército realiza una contraofensiva en contra de los manifestantes dejando más muertos en Oruro, El Alto, y el Chapare. Finalmente el 17 de octubre frente a la gran movilización que demanda la derogatoria de la ley de hidrocarburos, la eliminación del proyecto Pacific LNG y la renuncia del presidente, Gonzalo Sanchez de Lozada sale del país y asume la presidencia Carlos Mesa. A partir de este momento el nuevo presidente junto a las empresas Repsol YPF y British Gas harán todos los esfuerzos por implementar nuevamente el proyecto de exportación Pacific LNG, lo que a la larga provoca nuevamente en el mes de mayo y junio 2005 movilizaciones que finalmente terminarán con la renuncia de Carlos Mesa, dando fin a la ejecución del proyecto Pacific LNG.

La llamada Guerra del Gas es la muestra más dramática de las acciones de la empresa Repsol YPF en Bolivia, que para imponer al país el proyecto Pacific LNG, un negocio que le daría extraordinarias ganancias en contra de los intereses del país y de la oposición generalizada de sus pobladoras, utilizó el apoyo del aparato del Estado nacional que reprimió toda oposición al proyecto ocasionando la masacre de 63 personas y cientos de heridos.

Desde luego una de las razones para que Sanchez de Lozada imprimiera tan dura represión se encontraba en la protección de los intereses transnacionales, específicamente, en la protección y defensa del Proyecto de Exportación Pacific LNG, en esa medida las actividades de Repsol YPF en el país han sido las causantes de dicho desenlace, no obstante, no estando contentas con el desenlace de lo que se denominó la Guerra del Gas, posteriormente también se dio a la tarea de presionar al gobierno de Carlos Mesa.

Acabar con la vida de varias decenas de personas y dejar gravemente heridas a más de 500 es uno de los atentados más grandes a los derechos humanos que se han cometido en Bolivia, relacionados con la intención de promover y defender la el proyecto de exportación de gas de una transnacional ●